

La economía venezolana 2006-7: crecimiento, inflación y corrupción

Con los precios del crudo y productos derivados que superan los 56 dólares por barril en promedio para las exportaciones en el 2006, 115% más altos que 2003, la economía venezolana ha crecido en 2005-6 a tasas superiores a 9% anual, bajo el empuje directo e indirecto del gasto gubernamental costado con petróleo, mayor recolección de impuestos, emisiones de deuda pública e increíblemente por el uso de las reservas internacionales para financiamiento monetario del gasto extra-presupuestario. La sola experiencia venezolana desde 1974, obviando las referencias internacionales, indican que semejante patrón de gasto público y crecimiento económico no es ni saludable ni sostenible y además que los controles de cambio, precios, tasas de interés al mantenerse en el tiempo agudizan los desequilibrios económicos. Aunque el petróleo permitió diferir los ajustes, el tiempo de postergación se acaba y los problemas económicos se acumulan y su manifestación más visible, pero no la única, es la inflación de Venezuela en 2006, la más alta de América Latina, estimada en 17%, con excepción de Haití. Para el 2007, a pesar de subsidios a alimentos e insumos básicos de construcción, la inflación se estima en 19-20% y será la más alta de la región sin excepciones.

Lo sensato en Venezuela era evitar repetir los graves errores fiscales cometidos desde 1974, causantes de presiones inflacionarias, despilfarro y corrupción, con una nueva estrategia fiscal acorde con un inteligente plan de desarrollo nacional, con gasto social, inversiones públicas y ahorro petrolero. La doctrina revolucionaria y su esquema poco claro de socialismo de siglo XXI, sin embargo, en 2006 sólo aspiraba a hacer sentir una bonanza temporal antes de las elecciones presidenciales, esconder los desequilibrios económicos que se manifiestan en inflación y alza del tipo de cambio no oficial, a pesar de los controles estatales, con el fin de ilusionar y seducir al elector.

El 2007 comenzará con el peso sostenido y creciente de los problemas económicos que se manifiestan con fuerza – inflación alta y reprimida por controles, exceso de liquidez monetaria, presión alcista en el tipo de cambio paralelo y tasas de interés negativas – los cuales amenazan con degradar los beneficios sociales alcanzados con el uso y abuso del gasto público financiado por altos ingresos petroleros en 2004-6. La cuestión pareciera ser simple en principio: mientras el precio del petróleo sea alto se pueden encubrir todos los

problemas. Sin embargo, no es así. En realidad las dificultades se difieren por un plazo, pero los desequilibrios económicos se acumulan, se agudizan y se presentan ya en forma crítica en tres ángulos de seria influencia social y productiva: 1) La inflación sube y reduce el poder adquisitivo del salario; 2) los costos de producción nacional suben con la inflación y el anclaje cambiario reduce exportaciones no-petroleras y el empleo productivo, junto a elevadas importaciones; 3) el gasto público *real* cae ante los precios altos y ajustes salariales, lo cual en la práctica reduce las partidas de mantenimiento, suministros e inversiones públicas.

Ante este panorama problemático, el presidente Hugo Chávez, reelecto y con grandes planes nacionales e internacionales en mente, revela graves limitaciones bajo el sesgo de una ideología de izquierda radical anti-mercado. Aumentan los controles gubernamentales de precios los cuales crean desabastecimiento, mientras las importaciones cubren cada vez más la mayor demanda de bienes, pero en particular de consumo. Por un lado las importaciones ayudan a reducir parcialmente las presiones inflacionarias, pero por otro desestimulan a los productores nacionales, con serias dificultades para competir. El resultado es que empresas industriales comienzan a importar más insumos o productos terminados para su distribución, se adaptan al ambiente de una moneda sobrevaluada y alta inflación. Se trata de la bien conocida Enfermedad Holandesa, o mal de desindustrialización, la cual afecta con fuerza cuando se inducen fuertes aumentos de la demanda interna con los ingresos extraordinarios provenientes de la exportación de un recurso natural, acompañados de un anclaje del tipo de cambio.

La reforma constitucional de 2007 apunta a reducir el espacio de la propiedad privada bajo el Socialismo del siglo XXI, con la expansión del sector público y de un sector experimental de propiedad colectiva – cogestión, cooperativas y centros de desarrollo endógeno – el cual en si mismo es completamente dependiente de transferencias y subsidios gubernamentales. Este esquema colectivo, todavía sin indicios de éxito en la organización de nuevos sectores productivos, parece ser la respuesta gubernamental a la aspiración ideológica de reducir el ánimo de lucro individual. Sin embargo, el gobierno enriquece a los banqueros con ganancias cambiarias inmediatas en oscuras operaciones con el Ministerio de Finanzas, bajo la excusa que estas reducen el exceso de liquidez monetario y la presión en el mercado cambiario.

La oferta de Chávez de mayor peso del estado en la economía, acompañada de precaria política económica, no es novedosa. Se agrava por la experimentación con propiedad colectiva fuertemente subsidiada por el Estado y la amenaza de cambio de sistema económico a uno socialista. Su oferta de combatir la corrupción con “una espada” o sin ella no es creíble,

pues varios de sus colaboradores cercanos toleran o participan de la corrupción en manejos financieros, contratos y comercialización de empresas del estado. La “burocratización” no se enfrenta con fondos paralelos al presupuesto nacional sin transparencia, se requiere reemplazar colaboradores leales pero corruptos o ineptos por gente capaz. El 2007 mostrará los límites de una ideología anacrónica y de la incompetencia bajo un liderazgo carismático y personalista que liquida las instituciones.

Las finanzas públicas, la banca y la corrupción

El sector que más se beneficia de la ineficiencia e ineficacia en el manejo de los recursos fiscales, de las malas políticas para controlar el exceso de liquidez monetaria y la corrupción reinante es la banca privada. Sin duda una paradoja si se toman en cuenta las críticas palabras del presidente Chávez al capitalismo salvaje. Ciertamente un sector financiero se vuelve inescrupuloso bajo una débil supervisión bancaria, una bonanza petrolera y las distorsiones creadas por el intervencionismo estatal y el control de cambio.

El rápido crecimiento de la liquidez monetaria, 145% desde enero del 2005 hasta finales de noviembre 2006, 23 meses, presiona la inflación y el mercado cambiario paralelo, el cual se encuentra en 3.150 bolívares por dólar en la segunda semana de diciembre 2006 mientras el tipo de cambio oficial es 2.150 bolívares por dólar. El estímulo a sacar ventajas comerciales y financieras de esta brecha trastorna todo incentivo a inversiones productivas y a buscar beneficios de largo plazo, aún sin considerar las amenaza de radicalización socialista que promete el régimen. El Banco Central de Venezuela disminuido en sus funciones por el Gobierno del Presidente Chávez ya no puedo hacer mucho más para contener el impacto inflacionario del exceso de liquidez. En conjunto, estas condiciones convierten al sector privado, agentes financieros y a los operadores de negocios y negociados del chavismo en especuladores. No hay política económica que pueda ofrecer resultados positivos en este contexto.

Ante las presiones inflacionarias y los controles de tasas de interés en 2006, una parte minoritaria de la banca toma ciertas precauciones restrictivas en captación, colocación y reducción de costos. Otra parte del sector bancario aprovecha las debilidades de la Superintendencia de Bancos bajo la revolución chavista y las grandes oportunidades de ganancias con el gobierno, con altos ingresos petroleros y con propensión a la corrupción. Frente a los problemas de exceso de liquidez monetaria y presión alcista en el mercado cambiario paralelo, el Ministro de Finanzas ha diseñado un esquema de suministro de diversos instrumentos de deuda pública venezolana, argentina y de otras naciones por montos entre 200 y 400 millones de dólares semanales

a algunos bancos privados, sin subasta, pagaderos en moneda nacional a tipo de cambio oficial de 2.150 bolívares, más una prima variable.

Para los bancos que inmediatamente pueden liquidar estos instrumentos en Nueva York, y obtener diferenciales instantáneos muy grandes en el mercado cambiario paralelo, estas operaciones constituyen la principal fuente de ganancias, oculta en sus Estados de Resultados. En caso que la institución financiera privada favorecida con una asignación semanal de estos instrumentos no disponga de fondos en bolívares distintos antes de la tesorería pública pueden hacer colocaciones en bolívares en cuenta corriente para ayudar “financiar” estas operaciones. Hay quejas sobre la distribución de estas colocaciones semanales, sobre la influencia de intermediarios, todo con abierta impunidad. Estas prácticas son el resultado de la continuación en la creatividad e imitación de previas operaciones con marcados signos de irregularidades financieras del Ministerio de Finanzas desde 2002.

Si en realidad el objetivo del Ministerio de Finanzas fuese satisfacer parte de la demanda final de divisas y reducir el exceso de liquidez en forma temporal, acudiría a mecanismos transparentes de subastas en el mercado de capitales, pero claramente se apunta a favorecer algunas instituciones financieras en el suministro de divisas. El control cambiario se aplica para el resto de las actividades económicas que deben pasar por los largos y discrecionales procesos burocráticos.

La viabilidad de cerca la mitad de las más de 40 instituciones financieras privadas del país depende de sus relaciones con entes del gobierno, ya sea para captar depósitos o para inversiones en títulos públicos y operaciones con ganancias cambiarias inmediatas como las descritas. Con algunas excepciones y según el acceso preferencial de cada banquero, los entes financieras se enriquecen como nunca antes con operaciones con el Ministerio de Finanzas por más de 7.000 millones de dólares en la compra/venta de los bonos argentinos y otros derivados de deuda desde 2005. Estas operaciones no se registran contablemente en los balances bancarios, debido a que la ganancia es cambiaria y al usar el tipo de cambio implícito o el del mercado paralelo para su registro sería un ilícito cambiario. De modo los bancos usan empresas relacionadas y las ganancias quedan en parte para los accionistas dominantes y el resto para la institución financiera. Todos estos vicios los promueven sectores “revolucionarios” e intermediarios que cultivan una cínica relación de explotación salvaje de los ingresos gubernamentales con parte del sector bancario que comparte con ellos algunos riesgos y todos los beneficios. Esta es la otra cara de una política económica que promete continuar en 2007 agravando errores costosos para las mayorías, pero enormemente beneficiosos para una parte de la elite revolucionaria.